



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>

Chile, Colombia y Ecuador:
educación sexual en convenciones internacionales e iniciativas estatales

Chile, Colombia and Ecuador:
sex education in international conventions and state initiatives

Diogo Cavazotti Aires¹
Universidad Católica de Colombia
Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Doctor Eduardo Andrés Perafán del Campo
10 de febrero de 2021

¹ Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia. Becario del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia (ICETEX). Periodista por la “Universidade Tuiuti do Paraná” (Brasil). MBA en Periodismo por la “Faculdade Internacional de Curitiba” (Brasil). Especialización en Educación para los Derechos Humanos por la “Universidade Federal do ABC” (Brasil) (en curso). Correo electrónico: dcavazotti@gmail.com.

Resumen

A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta documentos más recientes del mismo segmento, la educación ha sido tratada como una prioridad en la infancia y la adolescencia, con el objetivo de promover el desarrollo de la personalidad integral del ser humano. Esto incluye, a veces directamente, a veces indirectamente, la atención a la enseñanza de la sexualidad para mejorar las condiciones y el acceso a la salud pública, y al crecimiento personal, profesional y económico del individuo y del país. Con base en las leyes nacionales vigentes, esta investigación explica cómo Chile, Colombia y Ecuador han abordado la educación sexual. El propósito es analizar si estos países siguen los parámetros definidos en convenciones internacionales. La investigación se sustenta a partir de un proceso de revisión y análisis documental que, con base en las recomendaciones de tratados de derechos humanos, indaga sobre la realidad de los países mencionados en materia de educación sexual. En este estudio se logra determinar que los diferentes enfoques de educación sexual en Chile, Colombia, y Ecuador, quienes ocupan posiciones distintas en el ranking de embarazo adolescente en Latinoamérica, explican los resultados desiguales que presentan dichos países.

Palabras clave: Educación Sexual; Convenciones Internacionales; Educación; Derechos Humanos; Desarrollo; Chile; Colombia; Ecuador.

Abstract

From the Universal Declaration of Human Rights to more recent documents of the same kind, education has been treated as a priority in childhood and adolescence to promote the development of the human being's integral personality. This includes, sometimes indirectly, attention to the teaching of sexuality to improve conditions and access to public health and the personal,

professional, and economic growth of the individual and the country. This research explains how Chile, Colombia, and Ecuador have approached sexuality education based on current national laws. The purpose is to analyze whether these countries follow the parameters defined in international conventions. The research is grounded on a documentary review and analysis process that, based on the recommendations of human rights treaties, explores the reality of the countries mentioned above in terms of sex education. This study determines that the different approaches to sex education in Chile, Colombia, and Ecuador, which occupy different positions in the ranking of teenage pregnancy in Latin America, explain the unequal results presented by these countries.

Keywords: Sex Education; International Deals; Education; Human Rights; Development; Chile; Colombia; Ecuador.

Introducción

Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA: 2020), América Latina y el Caribe tienen el segundo mayor número de jóvenes entre 15 y 19 años embarazadas (62 casos por cada 1000), solo superados por África (103,5 casos). Dentro de América Latina, el ranking entre los países fluctúa ampliamente. Si bien tenemos a Chile con una tasa de fecundidad adolescente de 41 en el grupo de edad y selección citados, es decir, inferior al índice continental, Ecuador obtiene el más alto número, con 111 casos. Colombia ha obtenido un índice de 75 episodios de embarazo por cada 1000 adolescentes, es decir, está lejos de acercarse a Ecuador, pero todavía está por encima del promedio latino. Los datos se publicaron en 2018 sobre la base del análisis realizado de 2006 a 2015 (UNFPA: 2018).

Este estudio analiza las leyes de educación sexual vigentes en Chile, Colombia y Ecuador, de acuerdo con las directrices de las convenciones internacionales de derechos humanos, una vez que

la enseñanza en sexualidad aparece con cada vez más frecuencia en estos instrumentos. El criterio de selección para la elección de estos países fue el ranking de índice de embarazo adolescente en América Latina (UNFPA: 2018). La investigación consiste en ampliar el debate sobre cómo los países proporcionan acceso a la educación sexual, una vez que: "los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y están protegidos por el derecho internacional" (Bedoya Abella: 2014, p. 96).

El análisis de los documentos de derechos humanos parte del referente de la creación de las Naciones Unidas y, en consecuencia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Talavera (1998) escribe que después de 1945 la humanidad estaba "aparentemente madura" en relación con la toma de decisiones políticas y el pensamiento legal, para aceptar que la protección de los derechos fundamentales de la población era responsabilidad de los Estados soberanos, por lo tanto, deberían estar en concordancia con el formato de las Naciones Unidas y las convenciones internacionales, tal como las conocemos hoy.

La evolución de este discurso aborda, de manera cada vez más frecuente, los temas sobre educación y sexualidad. Sin embargo, el reconocimiento de la sexualidad como parte fundamental para una educación integral del ciudadano es visto como un gran desafío por diferentes autores, principalmente debido a una resistencia histórica de los Estados. Para Astudillo (2017), la complejidad de abordar este tema radica en el fracaso de los propios Estados para regular la sexualidad humana a través de la educación.

En el campo educativo el déficit democrático es grande en oportunidades, en cobertura, discriminación de género y en el hecho de negar o guardar información respecto a la sexualidad, razón por la cual en nuestro continente americano la educación sexual sólo por excepción ha sido incluida de manera formal en los programas escolares oficiales, no obstante reconocerse que es una educación para la vida, la vida real de cada una/o de los educandos; de igual forma a pesar de su

carácter de tipo preventivo, formador y que potencia el desarrollo humano (Londoño E.: 1996, p. 232).

Por esta dificultad los organismos de derechos humanos pasaron, en las últimas décadas, a prestar más atención a este tema en convenciones internacionales, abordando la importancia del asunto en el ámbito educacional, estratégico y, claro, de derechos humanos, como será presentado más adelante.

Metodología

El análisis descriptivo se llevó a cabo mediante el cruce de datos con base en los documentos de las convenciones internacionales de derechos humanos y las leyes vigentes en los tres países objetos de estudio. A través de la indagación de fuentes primarias y secundarias, se establecieron los cimientos necesarios que ubican la educación sexual en un lugar especial dentro del campo de los derechos humanos. Así, de manera cualitativa, el estudio plantea aspectos constitucionales y jurídicos que ponen a estos países bien sea en acuerdo, o en desacuerdo, en relación con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

La elección de un análisis documental de Chile, Colombia y Ecuador tuvo como objetivo establecer una comparación entre estos tres países ubicados en el mismo continente que, desproporcionadamente, ocupan espacios tan distintos en clasificación del número de adolescentes embarazadas. Según los autores analizados en este documento, esta clasificación es, entre otros, uno de los índices para medir los conocimientos sobre sexualidad proporcionados a los jóvenes a través de la educación.

La revisión de la literatura reúne a autores y autoras de diferentes áreas del conocimiento con el fin de mostrar cómo la educación sexual es transdisciplinaria, es decir, tiene diferentes áreas

involucradas. De este modo, se buscaron puntos de referencia en los estudios de la psicología, la educación, la sexualidad y los derechos humanos.

Beneficios de la educación sexual

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha considerado, desde hace algunos años, la educación sexual como una forma para que los niños, niñas y adolescentes reciban información que permite la toma de decisiones de manera responsable tanto en aspectos de sexualidad como en las relaciones interpersonales:

O dejamos a los niños y niñas encontrar su propio camino en la nebulosa de información parcial, la desinformación y la explotación que podrían encontrar en los medios de comunicación, Internet, grupos de pares o personas inescrupulosas; o aceptamos la tarea de proporcionar una educación en sexualidad clara, informada, sustentada en hechos científicos e inspirada en los valores universales de respeto y derechos humanos (Unesco: 2010, p. iii).

En el informe titulado "Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad" hay un enfoque basado en evidencias de escuelas, maestros y educadores de salud, el cual aborda un programa básico de sexualidad dirigido a estudiantes de 5 a 18 años. El documento muestra que la educación sexual efectiva es un elemento fundamental para la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), la reducción de los episodios de embarazo adolescente (con mayor conocimiento de los métodos anticonceptivos), contribuye a retrasar el inicio de la vida sexual, reducir los casos coercitivos de violencia dentro de este tema, así como otros casos de riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, se sugiere que el público-objetivo, estudiantes de entre 5 y 18 años, tengan acceso a un conocimiento, de acuerdo con el rango de edad, que los haga protagonistas de su propia vida sexual, reduciendo así la posibilidad de ser objeto de perturbaciones no deseadas en el campo de la intimidad, en la vida y

en el protagonismo social (Unesco: 2010).

Además, la Unesco considera que una inadecuada salud sexual y reproductiva es la razón principal del elevado número de enfermedades e infecciones de transmisión sexual en los jóvenes. Por lo tanto, resolver este problema es un factor crucial desde una perspectiva social y económica, dado que las ITS, los abortos inseguros y los embarazos no planeados implican en onerosa carga para el presupuesto de las familias, además de impactar los recursos gubernamentales, como en el caso de posibles tratamientos que pueden extenderse durante toda la vida del paciente (Unesco: 2010). La educación sexual también representa "una estrategia fundamental hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular, los objetivos 3 (lograr la igualdad de género), 5 (reducir la mortalidad materna) y 6 (combatir el VIH y el SIDA)" (Unesco: 2010, p. 05). A su vez, según el informe, una adecuada educación en sexualidad proporciona el fortalecimiento de valores como la igualdad, la reciprocidad, el respeto y la responsabilidad, requisitos previos para una vida armoniosa, ya que proporciona relaciones sociales y sexuales contextualizadas con la diversidad del mundo (Unesco: 2010).

Los profesionales de la educación también defienden este enfoque en la infancia y la adolescencia porque hace que el público-objetivo sea más consciente de sus propios derechos:

La educación sexual es la posibilidad de preservar a los niños y adolescentes de posibles abusos. La educación sexual en la escuela puede funcionar por la no sumisión de niños y adolescentes a las relaciones de poder y violencia que nuestra sociedad patriarcal, machista y sexista nos ha impuesto. Es por eso por lo que tanta resistencia de sectores de parte de la sociedad, para que las transformaciones de las relaciones de poder no sucedan (Santos: 2020).

Un estudio de 2010 realizado en 16 países de América Latina, incluyendo Chile, Colombia y Ecuador, encontró que los niños acosados en entornos escolares sufren significativamente menor rendimiento de lectura y matemáticas en comparación con los otros (Colombia: 2018a), limitando

así, a futuro, incluso las oportunidades laborales. Del mismo modo, los expertos dicen que la educación en sexualidad es esencial para prevenir la violencia contra las mujeres, así como contra la comunidad LGBTIQ+² y episodios de acoso escolar. Tal como indica Frischeisen (2019): "Es imposible alcanzar niveles razonables de violencia sin que, en las escuelas, desde la educación de la primera infancia, haya una preparación". Es decir, un enfoque sobre este tema bajo el sesgo de los derechos humanos y la ciencia, incluso antes del acceso a los comportamientos culturales y sociales.

Así mismo, de acuerdo con los especialistas, estudiar la misoginia dentro de la educación sexual tiene un papel importante para lograr la igualdad de género. "La historia de la desigualdad de género facilita entender y generar conciencia sobre la violencia sistemática contra las niñas y las mujeres hoy en día. Implica revisar el pasado para entender los relacionamientos actuales" (Redim: 2016, p. 36). Por lo tanto, una educación sexual basada en evidencias científicas es un elemento sustancial para evitar la discriminación en la infancia y la adolescencia.

Las niñas que reciben educación sexual integral tienen menos probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia, y más probabilidades de contar con herramientas educativas que permiten dotarles de los conocimientos, la confianza y de información veraz y científica sobre la salud sexual y reproductiva (Redin: 2016, p. 72).

Otro factor para tener en cuenta son las tasas de suicidio en esta parte de la población. Un estudio colombiano mostró que el 48% de las víctimas de abuso sexual tenían una idea suicida (Pérez Prada *et al.*: 2017). Además, entre el 6% y el 13% de los adolescentes informaron que ya habían intentado acabar con sus vidas, y que todos habían sido víctimas de violaciones sexuales (Casullo: 2004). Otro aspecto relacionado con el tema son los episodios de homofobia, que causan intentos de

² Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, *queer* y más.

suicidio, discriminación, depresión, ansiedad, uso de sustancias psicoactivas, homofobia internalizada, baja autoestima, entre otros (Roa: 2017). Teniendo en cuenta que la educación sexual previene posibles episodios de agresión y abuso (Santos: 2020), a su vez, también puede contribuir a la reducción de intentos suicidas.

En el ámbito económico, sólo en 2018 se estima que los países latinoamericanos perdieron un promedio del 0,35% del PIB (Producto Interno Bruto) debido al embarazo adolescente. Esta cuenta fue realizada tomando como base la pérdida de ingreso por parte de las madres jóvenes, ya sea en el empleo u otra actividad laboral (UNFPA: 2020). Si Colombia hubiera efectuado programas eficaces para prevenir el embarazo adolescente, habría ahorrado aproximadamente 5 mil millones de dólares en el año, equivalentes al 0,56% del PIB (DW: 2020). Estas cifras ayudan a trazar los beneficios de un programa eficaz de educación sexual, principalmente si hablamos de un continente con bajas posiciones en la clasificación mundial del IDH (Índice de Desarrollo Humano) (PNUD: 2019). Para Tobar (2020), la importancia de este debate está directamente relacionada con el progreso de la región: "el embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina".

El desafío es grande para lograr los beneficios que involucran este tipo de enseñanza. Los jóvenes representan el 30% de la población de las Américas y los profesionales y entidades ya han declarado que "la salud de los adolescentes y jóvenes es un elemento clave para el progreso social, económico y político del territorio" (Maddaleno *et al.*: 2003, p. 133).

La adolescencia es un período de la vida caracterizado por una vulnerabilidad especial, donde el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por VIH/SIDA, son las principales consecuencias de la actividad sexual temprana sin protección, por lo que es muy relevante para prevenir el acceso oportuno de los adolescentes a programas eficaces de educación sexual (Montero V: 2011).

Para inducir y promover esta atención a los niños y adolescentes, las Naciones Unidas han

elaborado instrucciones sobre cómo abordar la educación sexual. En primer lugar, el enfoque debe incluir las cuestiones de diversidad y género como una forma de promover el respeto. Por otra parte, los padres deben ser incluidos para que el proceso de aprendizaje y conocimiento continúe en casa. Además, la educación sexual también puede combinarse con otras disciplinas de manera transversal (ONU: 2018).

El enfoque de educación sexual en derechos humanos problematiza, explicita y trata de deconstruir las representaciones sociales negativas impuestas a los sujetos e identidades excluidos (por clase, raza/etnia, sexo, género, sexualidad, orientación sexual, regionalidad) (Almeida y Luz: 2014, p. 100).

Educación sexual en convenciones internacionales

El tema de la educación sexual está presente, directa o indirectamente, en diversas convenciones internacionales, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, que tiene el artículo 26 todo dedicado a la educación y resalta su principal esencia:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (ONU: 2009).

Es posible inferir a partir de este pasaje algunas de las condicionales para la educación sexual pues, entre varias funciones, el estudio de la sexualidad es una de las áreas del entorno escolar que tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad integral del ser humano. Chile, Colombia y Ecuador se encuentran entre los países miembros fundadores de las Naciones Unidas y los

signatarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU: 1948). Sin embargo, es importante recordar que el documento no es vinculante para los países, ya que “no tiene valor obligatorio; es decir, al ser aprobada por medio de una Resolución de la Asamblea General, no posee valor vinculante para los Estados, aunque sí tiene un valor moral innegable” (Pérez *et al.*, 2020, p. 58). Sin embargo, muchos foros adoptaron los artículos de la declaración, vinculantes o no (Turgis: 2012). Además, posibilitó la creación de nuevos documentos, como pactos que llegaron años después.

Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos era sólo una Declaración, sin medios para hacerla ejecutable, la Comisión de Derechos Humanos comenzó, aún en 1949, la preparación de los Pactos, a prepararse en forma de convenios internacionales. En 1954, presentó dos anteproyectos de pactos que se ocupaban por separado de los derechos, un pacto que contenía derechos civiles y políticos y otro con derechos económicos, sociales y culturales (Leal y Gorczewski: 2013, pp. 218-219).

En este contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aparece en 1966, donde el artículo 13 explora el tema de la educación, y se abordan temas inherentes a los logros obtenidos por medio de la educación sexual:

Los Estados Partes en este Pacto reconocen el derecho de todos a la educación. Coinciden en que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al sentido de su dignidad, así como a fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También están de acuerdo en que la educación debe permitir que todas las personas participen eficazmente en una sociedad libre, promuevan la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promuevan las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (UN: 2020).

En 1988 surge el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que las naciones pudieran trabajar en conjunto por un hemisferio de instituciones democráticas, con un sistema de justicia social y libertad personal, basado en el respeto de los derechos humanos. En el artículo 10, los países se comprometen a proporcionar educación a la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud. El artículo 13, todo destinado al derecho a la educación, repite algunos conceptos de tratados anteriores, pero esta vez la atención se centró en los países que son miembros de la Convención Americana. En este concepto, propone garantizar que las naciones traten la educación con el objetivo de desarrollar plenamente la personalidad humana y en el sentido de su dignidad, respetando así los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz. El documento también hace énfasis en que la educación debe empoderar a todas las personas para que participen eficazmente en una sociedad democrática y pluralista, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los grupos, realizando actividades a favor de la paz. Chile, Colombia y Ecuador forman parte de los países que firmaron el protocolo (CIDH: 1999). Entre los 22 artículos que hablan sobre los derechos económicos, sociales y culturales, “la educación también aparece con fuerza como herramienta de difusión y trabajo sobre los objetivos, políticas y programas vinculados con los tratados que persiguen metas concretas” (Scioscioli: 2014, p. 12). Una vez más, si no especifica el tema de la educación para la sexualidad, menciona objetivos y metas que, como se identifica en este estudio, se logran a través de este enfoque en niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

La Convención de 1990 sobre los Derechos del Niño es el documento de derechos humanos más ratificado del mundo y aborda los derechos inherentes a la infancia, incluidas las obligaciones comunes a los Estados con respecto a la educación y el desarrollo. Entre los diversos artículos relacionados con estos temas, el que más está relacionado con el presente estudio es el número 19:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, delitos o abuso, negligencia o trato irrazonable, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño esté bajo la custodia de los padres, tutor legal o cualquier otra persona responsable de ello (UNICEF: 1990).

Dentro de esta convención, también se destacan los artículos 28 y 29, los cuales plantean la educación como una forma de ejercer de manera progresiva e igualitaria las oportunidades de derecho. La importancia práctica del documento es expresada por Bruñol:

Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños no fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron expuestos a diversas formas de abuso público, antes desconocidas, debido a la indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia. Sólo con el proceso iniciado con la Convención en el que los intereses de los niños se convierten en genuinos derechos, los niños podrán oponer sus derechos como límite y orientación tanto de la actuación de los padres, como del Estado (2001, p. 37).

La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en Egipto en 1994, tuvo como resultado un plan de acción con compromisos para mejorar la vida de la población, incluyendo temas sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva. A pesar de ser criticado por algunos de los 179 países presentes, la educación sexual fue debatida y vista como una de las formas de alcanzar los objetivos mencionados en la conferencia (ONU: 1995). Sawyer, quien estuvo presente en la conferencia, informa que en ese momento "la salud y los derechos reproductivos y sexuales eran una nueva síntesis entre la planificación familiar y el feminismo, hasta ahora considerada incompatible" (2019, p. 08). A partir de dicha conferencia las convenciones trataron de manera más clara y directa la función y la

importancia de una educación para la sexualidad como una forma de afrontar muchos desafíos presentes en la vida infantil y adolescente.

Del mismo modo, la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, en 1995, propuso garantías que incluyeron la educación y la promoción de la salud sexual y reproductiva (ONU: 1996) y también tuvo la participación de los países que son objetos de estudio en esta investigación. Además, entre los Programas de Desarrollo de las Naciones Unidas, las estrategias para jóvenes entre 2014 y 2017 dijeron que "existe una gran necesidad de invertir en educación sexual y reproductiva y servicios de salud especialmente diseñados para los jóvenes" (ONU: 2014, p. 12).

Pero, si la educación sexual está presente en estas convenciones desde la década de 1990, ¿por qué todavía las recomendaciones no se encuentran asociadas a las leyes de los Estados?

Podemos preguntarnos por qué, si hace más de tres décadas se incorporó la educación “sexual” y sobre anticoncepción a los pensum académicos oficiales de educación básica o secundaria en la mayoría de los países latinoamericanos, aún se observa un número no despreciable de embarazos aparentemente no deseados en adolescentes. No se trata solo de mejorar las “metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje”. Una educación sexual entre pares, participativa, práctica, transdisciplinaria, que traspase las fronteras del aula y respete la experticia sobre la situación de las adolescentes y los adolescentes (Ide: 2017, pp. 115-116).

Una de las razones de la crítica de Ide es el debate que señala los derechos humanos como un desafío a la autonomía de los Estados, lo que dificulta la toma de decisiones de estas conferencias.

(...) la Asamblea General es casi enteramente un dominio de lo discursivo; tales declaraciones tienen un peso legitimador, pero no hay peso legal. Por lo tanto, los Estados de la Asamblea General pueden estar trabajando a efectos cruzados de los órganos de tratados y de los expertos del Consejo de Derechos Humanos (Miller y Roseman: 2011, pp. 12-13).

Incluso con los desafíos encontrados en la Conferencia en Beijing, adjunta la controversia sobre la mención de los derechos sexuales, defendida por Estados occidentales y efectivamente rechazada por países donde la religión tiene un carácter de poder político (Alves: 2001), el evento funcionó como un "hito esencial en el proceso de consolidación de los derechos de las mujeres a nivel internacional" (Guarnieri: 2010, p. 26). Cuando se tratan de los derechos de las mujeres, están sustancialmente incluidos los derechos sexuales de la información y de la educación.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), 1995, en su artículo 8 establece que los Estados Partes deben adoptar, de manera progresiva, programas para promover el derecho de la mujer a una vida libre de violencia (OEA: 1995). Para eso, también sugiere la educación:

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer (OEA: 1995, p. 03).

Para Spaccarotella (2019), la Convención de Belém do Pará proporcionó una nueva generación de legislación, tanto a nivel nacional, regional como internacional, además de inspirar el desarrollo de políticas públicas, campañas y creación de servicios especializados. Un ejemplo es la ley 1257 de 2008, introducida en el ordenamiento jurídico colombiano, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” (Flórez: 2018, p. 20).

Por su parte, el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2018 enfatiza la necesidad de que los países promuevan la igualdad de género y los derechos de las niñas

y las mujeres, incluido en el seno de las familias, para una concienciación a largo plazo, al igual que programas de formación de docentes, los cuales aborden la prevención de temas como “violencia sexual y de género, garantizando el acceso universal a una educación sexual integral y con base empírica” (ONU: 2019, p. 157). El documento sugiere que los países elaboren programas educativos y material didáctico, en particular enfocados hacia una educación sexual en “consonancia con el desarrollo evolutivo del niño, en donde se explique en qué consiste el consentimiento, el respeto de los límites y lo que constituye un comportamiento inaceptable, como el acoso sexual y la violencia de género” (ONU: 2019, p. 201).

La educación sexual como un derecho humano

Como se mencionó anteriormente, la educación sexual entendida como derecho humano apareció en las convenciones internacionales a partir de la década de 1990. Un retraso considerable, si pensamos que los tratados nacieron después de la Segunda Guerra Mundial.

El marco de los derechos humanos, con sus órganos internacionales, tribunales y convenciones, puede ser desesperadamente lento en su respuesta o incapacidad constante para alcanzar sus objetivos finales; pero la verdad es que no hay otra mejor estructura disponible para hacer frente a estos problemas (Hunt: 2007, p. 213).

Hay resistencia a este tema y en muchos países el abordaje está prohibido o se enfrenta a intentos de prohibición. En 2020, una resolución dirigida por México planteó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la importancia del acceso a la educación sexual y a los derechos de salud sexual para la población, especialmente las mujeres. Sin embargo, algunos países han estado en contra, tales como Egipto, Arabia Saudita, Rusia, Brasil, Qatar, Bahréin, Pakistán e Irak (Chade: 2020).

La dificultad para abordar la educación sexual radica en la perspectiva desde una mirada cultural:

Cuando una niña cuenta que está siendo abusada, se siente culpable, se siente sucia... dice que no cuenta porque su mamá la va a golpear... pero, ¿cómo es posible que una niña tan pequeña sienta eso?... La respuesta es porque así la han educado (Bermúdez y Matías: 2019, p. 22).

Una niña me decía un día que le daba miedo ir a la cocina a calentar el almuerzo. Yo pensé que, por la estufa, o porque se podía quemar... Pero no, resulta que era porque el vecino al lado, cada vez que la veía sola en la cocina, la empezaba a tocar debajo de la falda. ¿Cómo? ¿Ven? ¿Cómo es que este hombre se cree con el derecho de violentar a una niña? Porque desde pequeños nos enseñaron que lo podemos hacer. Como colegio y como educadores, es ahí donde nos damos cuenta de que tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar de hombres y mujeres para que realmente esas violencias de género empiecen a tener una transformación en nuestra sociedad. La solución está en la escuela (Bermúdez y Matías: 2019, p. 23).

La solución toca temas sensibles en distintos niveles de la administración pública, pero en particular y directamente en el de la educación, como ya se expuso en esta investigación. Además, también hay un desafío si la propuesta se basa en el corte transversal. "Deconstruir las prácticas pedagógicas realizadas hace años e insertar una nueva práctica no es una cosa sencilla. Pero necesitamos buscar soluciones a las demandas de los problemas contemporáneos y a la vida cotidiana de los estudiantes" (Barbosa *et al.*: 2019, p. 09). Figueiró expone claramente los desafíos para la educación en este campo:

¿Cuál sería la función del maestro que está dispuesto a hablar sobre la sexualidad en el espacio escolar? Algunos padres están preocupados, precisamente, porque temen que los maestros transmitan a sus hijos los valores que ellos, los maestros, defienden. Así, por ejemplo, los padres conservadores, que abogan por la virginidad hasta el matrimonio (para las hijas, la mayor parte del tiempo), temen que los maestros puedan predicar valores divergentes, fomentando, en este caso, el

sexo antes del matrimonio. Lo contrario también puede suceder, es decir, los padres que quieren que sus hijos sean libres para decidir responsablemente sobre su vida sexual, temen que los maestros conservadores infundan ideas de pecado. ¿Tendrían el derecho, maestros, de influir en sus alumnos con sus valores personales sobre lo que consideran correcto o incorrecto? Ciertamente no; depende de ellos crear varias oportunidades de reflexión, para que los estudiantes puedan pensar y discutir con sus compañeros, para que puedan formar su propia opinión (2007, p. 02).

Toda esta dificultad para trabajar la educación sexual integral como una cuestión de salud pública se puede traducir en algunos números. Respecto a las tasas de nacimiento en Chile, “las más altas se registran en los grupos etarios más jóvenes y, si bien el número de madres adolescentes disminuye entre 2013-2015, las madres de 11 años han aumentado” (Chile: 2018i, p. 49); el promedio de adolescentes madres o embarazadas es del 6%, y en adolescentes de 12 a 19 años sube al 9,2% (Chile: 2018i), mientras que Chile tiene las tasas más bajas de embarazo adolescente en América Latina.

En Colombia hay cifras que llaman la atención.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015, en Colombia el 23,4% de las mujeres entre 20 y 24 años se unió conyugalmente antes de los 18 años, y el 4,9% se unió antes de los 15 años. Así mismo, el 13,3% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya están casadas o en unión libre, y en zonas rurales esta cifra asciende al 21,5%. Para los años 2016 y 2017 se registraron 470 matrimonios con o entre personas menores de edad en notarias de Colombia. A su vez, las mujeres se unen a más temprana edad que los hombres, el 25 % de las mujeres entre los 30 y los 34 años reportaron haberse unido por primera vez antes de los 18 años, frente al 9,9% de los hombres. (...) En el 44,6% de mujeres entre los 13 y los 19 años que ya son madres, la edad del padre de su primer hijo la supera por lo menos en 6 años; un 19,5% en por lo menos 10 años; y en el 4,6% de los casos el padre es 20 años mayor. (...) Las cifras sugieren que el 55% de las madres adolescentes han presentado algún tipo de violencia por parte de su pareja antes

de cumplir el primer año de unión (Colombia: 2018a, pp. 1040-1041).

Una investigación en Ecuador ha planteado que 21,4% de niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual. “Seis de cada diez estudiantes han sido víctimas de violencia escolar y 26% de quienes sufren acoso escolar afirman que han intentado suicidarse” (Ecuador: 2018n, p. 03).

Veamos cómo Chile, Colombia y Ecuador abordan la educación sexual desde la legislación y planes nacionales vigentes. **Con el fin de lograr un espectro más amplio, se presentan, de manera directa y resumida, los extractos donde el tema es desarrollado en los documentos de cada Estado.**

Chile

Desde 2010 Chile tiene la Ley 20.418, que estableció normas de información y prestaciones sobre regulación de la fertilidad. En el artículo 1° se definió que los establecimientos educativos deben incluir en la enseñanza media un programa de educación sexual. El objetivo fue ofrecer contenidos que propendieran por una sexualidad responsable y que informara sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes. La aplicación de la ley ganó fuerza, pues un estudio mostró que las tasas de embarazo entre las adolescentes que participaron en programas de educación sexual disminuyeron significativamente (Chile: 2010).

En 2018 la educación sexual en Chile avanzó como una oportunidad estratégica de “propuesta formativa, preventiva y de resguardo de derechos de niños, niñas y adolescentes durante la trayectoria en el sistema escolar” (Chile: 2018a, p. 03). Los Ministerios de Educación, Salud y de la Mujer y la Equidad de Género emitieron una disposición que los reconoció como sujetos de los derechos amparados en las convenciones y los tratados internacionales ratificados por el país (Chile: 2018a) y destacaron que la política nacional trata de una “educación en sexualidad laica y

humanista como un derecho social” (Chile: 2018a, p. 25). Uno de los objetivos de la estrategia es garantizar la entrega de la información necesaria a los alumnos y alumnas para que se formen su propia opinión, con condiciones de libre expresión.

Chile reconoce que:

Un alto número de adolescentes inicia su vida sexual a más temprana edad, sin protección anticonceptiva y, por ende, con un alto riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión sexual. La población adolescente más pobre se encuentra dentro de los grupos más vulnerables debido a las escasas posibilidades y oportunidades para un desarrollo autónomo de su vida: se exponen a relaciones sexuales sin consentimiento, pueden ser víctimas de abuso sexual, no acceden a información adecuada en torno a la prevención o inician relaciones sexuales sin protección y se enfrentan a barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva (Chile: 2018b, p. 49).

Al reconocer los desafíos, el país desarrolla las actividades propuestas por el Ministerio de Educación sobre la temática de educación sexual (Chile: 2018a), como:

- Elaboración de materiales educativos;
- Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad y género en establecimientos educacionales del país;
- Guía didáctica para educación sexual, con material de apoyo para docentes y sugerencias de actividades e indicadores de evaluación de acuerdo a los programas de estudio;
- Manual para facilitadores de sensibilización y prevención del acoso escolar homofóbico y transexual en establecimientos educacionales;
- Circular para sostenedores de establecimientos educacionales del país;
- Orientaciones para estudiantes LGBTIQ+;

- Protocolo de actuación para establecimientos educativos del país frente a estudiantes transexuales;
- Orientaciones para promover escuelas inclusivas (género, orientación sexual, identidad de género, estudiantes con VIH/SIDA e ITS, estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes);
- Revisión y ajuste de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, con inserción de protección de madres adolescentes con necesidades educativas especiales;
- Implementación de un sistema de apoyo y un programa de educación en sexualidad, afectividad y género a nivel de establecimientos educativos.

En gran parte de los documentos consultados la educación sexual no es el tema principal, pero proporciona notas sobre el asunto. El Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2018-2030 desarrolla metas e indicadores asociada a los distintos derechos y grupos de poblacionales específicos. Los indicadores muestran que:

Chile ha realizado grandes avances en materia de cobertura de salud y de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y muchos de sus indicadores son similares a los de los países desarrollados (por ejemplo, una baja mortalidad materna), pero aún muestra deficiencias en la atención y prevención de salud a colectivos específicos de mujeres: trans, lesbianas, rurales, migrantes y a ciertos grupos etarios, especialmente adolescentes y personas adultas mayores (Chile: 2018b, p. 49).

A pesar de que Chile tenga la menor tasa de adolescente embarazadas en Latinoamérica, el país entiende que los números todavía existentes son causados por la falta de programas continuados de educación en sexualidad con amplia cobertura:

La educación sexual y reproductiva orientada a la paternidad y maternidad responsables a partir de la educación escolar y el acceso a regulación de fertilidad para la población vulnerable, son elementos esenciales de salud pública que pueden ser mejorados (CHILE: 2008, p. 48).

La meta es que hasta el año 2030 todos los establecimientos del sistema educativo brinden educación sexual integral (Chile: 2018b).

De la misma manera, otros documentos fueron diseñados para alcanzar medidas de equidad en tema de derechos, como la Educación para la Igualdad de Género, con medidas de formación continua para docentes, con enfoque de género para adolescentes por medio de cursos sobre discriminación, inclusión y sexualidad (Chile: 2018c).

Dentro de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el Sistema Integral de Garantías de Derechos para el período de 2015-2025 tiene como parte estratégica “propiciar acciones tendientes al desarrollo de una sexualidad informada y segura de acuerdo al curso de vida” (Chile: 2018d, p. 86) y “reforzar la formación en sexualidad y afectividad, sin discriminación por género, identidad sexual o ante la presencia de situaciones de discapacidad” (Chile: 2018d, p. 89).

Las bases curriculares de la educación infantil tienen conceptos inclusivos de acuerdo con la Unesco sobre temas que señalan la diversidad sexual y de género como forma de brindar oportunidades de aprendizaje igualitarias (Chile: 2018e). Adicionalmente, en los lineamientos técnicos para la mejora de la calidad de la educación, hay puntos relevantes:

(...) para promover el desarrollo integral e inclusivo de la niña y el niño, se requiere un respeto y valoración de su género. Por tanto, el/la mediador debe eliminar las barreras sociales de estereotipos, que muchas veces provienen de la cultura y no del propio sentido que él o ella le da a su ser. El género debe vivirse como una construcción personal que le permita al párvulo sentirse cómodo, valorado y respetado independiente de la situación cultural en la que vive. Concebir que la cultura

se transforma, es concebir que el género también se transforma. Y hoy en día, una demanda social, que cada vez se hace más latente, es la libertad en la elección del modo de vivir la sexualidad. Pensar y actuar, por ejemplo, en función de que los niños necesitan más actividad física que las niñas, es guiar la acción pedagógica por una creencia estereotipada que impactará negativamente en la salud de las niñas y futuras mujeres de este país (Chile: 2018f, p. 21).

Este énfasis en la educación sexual se construyó con análisis y diagnósticos intersectoriales que permitieron visibilizar que faltaba educación en sexualidad para estudiantes, profesores, padres y apoderados (Chile: 2018g). Así, fue posible ampliar los conceptos para la educación en Chile, como “comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual” (Chile: 2018h, p. 25).

De la misma forma, programas de protección, especializada en reinserción educativa también tienen como obligación la inclusión de planes de “educación sexual, incluyendo temáticas como prevención del embarazo adolescente, vinculación de afectividad y sexualidad, y conocimiento y aceptación de la diversidad sexual” (Chile: 2017, p. 27).

Colombia

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de Colombia se habla de estrategias para la consolidación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, previstas en la Ley 1620 de 2013. Esta ley fue creada con el propósito de identificar, registrar y hacer seguimiento de los “casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos” (Colombia: 2018d, p. 18). El sistema tiene por objetivo fomentar acciones del Estado para la construcción de la educación para la sexualidad, garantizar protección de las niñas, niños y

adolescentes en los espacios educativos, atención de los casos de violencia y acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos, en la reducción del embarazo de adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual y otros (Colombia: 2018d). El documento incluso menciona garantías para la protección frente al acoso, violencia escolar, *ciberbullying* y sobre involucrar a la comunidad educativa para una reflexión sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.

Entre los objetivos del plan está promover la inclusión productiva de los jóvenes con el “fomento del autocuidado, la sexualidad responsable y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes para la toma de decisiones” (Colombia: 2018a, p. 371). Así como el Plan Decenal de Salud Pública, que plantea el fortalecimiento de la política de educación sexual de modo que involucre la comunidad de “niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres, madres, cuidadores, profesorado y demás personas que se relacionan con las instituciones educativas” (Colombia: 2018a, p. 392). Del mismo modo, el plan de desarrollo aborda la importancia de expansión de la cobertura del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de la Ciudadanía, y que contribuyó para generar un precursor en el país:

La Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional, más conocida como la sentencia Sergio Urrego³, marca un precedente en términos de la garantía del derecho a la educación libre de discriminación, a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al respeto por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (Colombia: 2018a, p. 394).

Otro objetivo del plan de desarrollo es “promover la educación sexual y el bienestar de las niñas,

³ En 2014, Sergio Urrego, 16 años, decidió quitarse la vida después de haber sufrido discriminación por parte de las directivas del colegio donde estudiaba, en Bogotá (Colombia), debido a su orientación sexual. El tema entró en debate en el país y cambió demandas constitucionales del tema.

niños y adolescentes y prevenir el embarazo adolescente, las uniones tempranas y el matrimonio infantil” (Colombia: 2018a, p. 441). Además, este plan promueve el desarrollo de temas como formación ciudadana y respeto por los derechos sexuales, pacto por la equidad, violencia basada en género e intrafamiliar, masculinidades no violentas y otros.

El Código de la Infancia y la Adolescencia establece en su artículo 14 la obligatoriedad de una cátedra de educación para la sexualidad para la enseñanza media y superior. El propósito es dar énfasis al respeto a la dignidad de los derechos de los menores de edad. Pero el documento está altamente enfocado en avanzar en temas sobre prevención y lucha en contra del turismo sexual, abuso sexual, violencia y explotación (Colombia: 2015).

Un poco más antigua, pero aún en vigor, la Ley General de Educación determina en el artículo 14 sobre la enseñanza obligatoria de educación sexual, pero impartida “de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad” (Colombia: 2018b, p. 06).

Otro documento que desarrolla el asunto es la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos emitida por el Ministerio de Salud. Entre los objetivos de acciones está el fortalecimiento de la educación sexual para los prestadores de servicios públicos orientados a reconocer la sexualidad como una condición humana, dentro de un enfoque laico (Colombia: 2014). La política busca ampliar el acceso al Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía por medio de un cuerpo docente preparado para “superar posturas moralistas” y “apuntar reflexiones de carácter ético desde una perspectiva de derechos sexuales” (Colombia: 2014, p. 101). Y como meta, a 2021 tener “80% de las instituciones educativas públicas con educación sexual basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de género y diferencial” (Colombia: 2014, p. 113).

Como forma de disminuir los números de embarazos en adolescentes, se establecieron los siguientes lineamientos para la prevención:

A nivel general, con base en la Constitución de 1991 se ha inferido que los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) forman parte de los derechos fundamentales y de los Sociales, Económicos y Culturales (DESC), como lo ha señalado la Jurisprudencia Constitucional (...). En ese contexto, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-440/92, estableciendo la necesidad de abordar la educación sexual en el país. Es así como el Ministerio de Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas mediante la Resolución 3353 de 1993 (fundamento del Proyecto Nacional de Educación Sexual formulado en 1993) (Colombia: 2018c, p. 12).

La Ley General de Educación sanciona la obligatoriedad de la educación sexual en el Decreto 1860 de 1994, y establece que esta enseñanza se cumplirá a través de proyectos pedagógicos. Los programas de educación sexual se realizan también en las comunidades por medio de programas gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales (Colombia: 2018c). La educación en la sexualidad y la emocionalidad está prevista en Colombia también desde la primera infancia, por medio de un documento más reciente, de 2018, llamado Manual Operativo para la Atención a la Primera Infancia (Colombia: 2018e).

Ecuador

El Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador, publicado en 2002 y todavía en vigor, tiene como principios fundamentales la igualdad y no discriminación, y sanciona que el Estado adoptará las medidas necesarias para eso. El documento da garantías de acceso al más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual para este público, incluso a la información y educación sobre prevención en materia de salud y desarrollo. Entre los objetivos de los programas de educación se

encuentran desarrollar la personalidad, promover la paz y actuar a favor de los derechos humanos, garantizar la no discriminación, las libertades fundamentales, la tolerancia de las diversidades y preparar niños, niñas y adolescentes para una ciudadanía responsable (Ecuador: 2018a).

Es interesante registrar que el Plan Decenal de Educación de Ecuador 2006-2015, institucionalizó la educación sexual en el sistema educativo a través del Acuerdo Ministerial 403. En el año de 2006, 13 mil maestros fueron capacitados. Fue incorporada la asignatura Educación de la Sexualidad en la formación profesional de nuevos docentes, también con la creación de un comité institucional para el tema (Ecuador: 2018b).

En el Programa de Gobierno 2017-2021, sobre la temática de educación, el documento propone una “revolución de la juventud”, tornando al joven en “protagonista de una nueva sociedad”. El programa dispone que se espera vivir libremente la orientación sexual, así como acceder a servicios de educación sexual (Ecuador: 2018c). Y más:

Promoveremos la educación sexual y reproductiva de los jóvenes, junto a las mujeres y hombres jóvenes, para garantizar su derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. Daremos prioridad a las adolescentes, para la prevención de embarazos (Ecuador: 2018c, p. 84).

Como principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 tiene metas en salud materna, sobre todo en lo concerniente a el embarazo adolescente. Y la falta de una atención al tema puede ser traducido en números:

(...) para el año 2015 el costo económico y social por la omisión de servicios de salud sexual y reproductiva llegó a US\$ 472,9 millones, lo que evidencia una deuda social en una adecuada educación sexual, reproductiva y de planificación familiar. (...) el embarazo adolescente merece una atención especial: en 2015 el porcentaje de nacimientos en mujeres entre 12 y 17 años fue de

10,2%, mientras que en 2006 fue de 8,1%. Esta problemática genera situaciones adversas, como la deserción escolar y la pobreza. (...) 6.487 adolescentes abandonaron los estudios por esta razón, lo que conlleva situaciones de vulneración de derechos que afectan su proyecto de vida (Ecuador: 2018d, p. 51).

Después del análisis de los datos, el documento resalta que “una educación sexual, reproductiva y de planificación familiar libre de prejuicios, permitiría la consecución del derecho a la libertad individual y garantizará la salud sexual y reproductiva” (Ecuador: 2018d, p. 51).

En 2004 un documento alertó sobre los problemas sociales de las altas tasas de embarazo adolescente. El estudio muestra que la desnutrición crónica infantil está relacionada, en diversos casos, con la incidencia del embarazo adolescente. Estos datos tuvieron como premisa generar políticas públicas de educación sexual en niños, niñas y adolescentes. Este mismo registro resaltaba la importancia de la educación sexual y reproductiva desde la niñez y adolescencia (Ecuador: 2018e, p. 48).

Como forma de prevenir y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas, entre las normativas de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 está la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo. Nuevamente se hace referencia a los altos índices de adolescentes embarazadas: en el 2013, 5% de niñas de 12 a 19 años eran madres o estaban en lactancia. Entre las propuestas estaba crear campañas informativas sobre educación sexual en los medios de comunicación (Ecuador: 2018f).

Entre los elementos constitutivos de la nación, el artículo 32 habla del derecho a la salud, incluso del acceso permanente a servicios de promoción y atención integral a la salud, salud sexual y educación (Ecuador: 2018g). Además, la Constitución garantiza la búsqueda por “erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual

de las estudiantes y los estudiantes” (Ecuador: 2018g, p. 107).

Con el propósito de plantear una reestructuración integral del sistema ecuatoriano de bachillerato, en 2010 surge un documento denominado “Nuevo Bachillerato Ecuatoriano”. Sobre el tema de esta investigación, es importante mencionar la intención de “conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad” (Ecuador: 2018h, p. 31). En la propuesta de la comunidad educativa para el Plan Nacional de Educación 2016-2025, existe el interés en eliminar patrones de comportamiento discriminatorios y violentos y ampliar la atención para la salud sexual y reproductiva en adolescentes y zonas de mayor pobreza (Ecuador: 2018i).

La Ley Orgánica de Salud, de 2006, todavía vigente, aborda las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública sobre el tema investigado, con la implementación de acciones de prevención en salud sexual, con énfasis en los adolescentes (Ecuador: 2018j). Además, la ley establece que el país:

(...) elaborará políticas y programas educativos de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello (Ecuador: 2018j, pp. 08-09).

Adolescentes actores de crímenes contra la integridad sexual y reproductiva serían obligados a participar en programas de educación sexual, dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas (Ecuador: 2018k).

Por otro lado, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que define los principios y fines que orientan la educación y el modelo de gestión nacional, presenta directrices acerca de cómo actuar en caso de abuso sexual, pero solamente de forma reactiva, pues no aborda

la temática de la educación sexual preventiva (Ecuador: 2018l). La Ley nº 175 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, establece actitudes para la reeducación de agresores y un enfoque educativo con términos sin definir un género directo, pero, nuevamente, no aborda la educación sexual como método preventivo (Ecuador: 2018m). Por otro lado, está en vigor el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2007-2021, con el objetivo de desarrollar estrategias para modificar indicadores en la zona que, según el documento, son prioridades en el país (Ecuador: 2017).

Sin embargo, los mecanismos individuales y colectivos contra los enfoques sobre este tema en la educación tratan de interferir con las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, en 2017, publicaciones de desinformación fueron difundidas a través de distintas redes sociales señalando que el Estado sugirió clases de educación sexual para que los estudiantes tuvieran "relaciones sexuales en todos los sentidos imaginables". Después de estas revelaciones, grupos conservadores pidieron manifestaciones en diferentes partes del país. El asunto tuvo que ser desmentido por las autoridades locales (Salud con Lupa: 2019).

En agosto de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por una adolescente de 14 años dentro de una escuela de ámbito estatal, cometida por el vicerrector de la institución. El crimen tuvo relación con el suicidio de la joven. Este fue el primer episodio sobre violencia sexual contra una niña en ámbito educativo que conoce la Corte Interamericana. Su decisión indicó que los y las estudiantes tienen derecho a un entorno educativo seguro y libre de violencia sexual. Resaltó también la importancia del derecho a la educación sexual y reproductiva como parte del derecho a la educación (CIDH: 2020).

Chile, Colombia y Ecuador en diálogo

Mientras que Chile tiene desde hace 10 años una ley de educación sexual obligatoria en la escuela secundaria y ya aborda en documentos la necesidad de anticipar esta enseñanza, Colombia y Ecuador discuten la cuestión en las leyes y planes gubernamentales, de modo que el tema no está institucionalizado con el fin de aportar resultados directos. Si bien Colombia tiene como objetivo tener en los próximos años aproximadamente el 80% de las instituciones educativas con educación para la sexualidad, Ecuador todavía propone este enfoque a través de campañas informativas, sin llevar el tema a la escuela a través de un programa integral y continuo. La atención desigual explica las diferencias en la clasificación de embarazo adolescente en América Latina, donde Chile tiene la tasa más baja, Ecuador la más alta y Colombia está entre los dos. Además, Chile es el más cercano a un método que está abordado con base en las convenciones de derechos humanos: el país incluye el concepto de transversalidad en la enseñanza de la sexualidad. Es decir, la asignatura se trata multilateralmente, donde los y las estudiantes se enfrentan a estos contenidos en diferentes oportunidades. Chile, además de estar más cerca de alinearse con las recomendaciones internacionales, va aún más lejos, prestando atención a la comunidad educativa transgénero, un tema que todavía aparece tímidamente en las convenciones. Así, trabaja con el objetivo de cambiar los patrones socioculturales, con propuestas para nuevos diseños educativos para la sexualidad, como plantea la OEA, por ejemplo.

Chile presenta los resultados de un número menor de adolescentes embarazadas y esta es una manera muy práctica de monitorear cómo la educación sexual es efectiva. En otras palabras, la educación sobre sexualidad puede ser un brazo en la construcción de un país con más oportunidades para los grupos históricamente vulnerables, que, al igual que otros ciudadanos, han garantizado los derechos constitucionales y, por lo tanto, contribuyen al crecimiento en la difusión de áreas

estratégicas de desarrollo. Lo interesante es que el país reconoce que todavía no hace lo suficiente y busca mejorar los métodos didácticos actuales, con el fin de reducir aún más las tasas de embarazo adolescente y también para hacer frente a los desafíos ya mencionados en este estudio.

En Colombia, la educación sexual está presente en varias leyes y también está entre los objetivos a alcanzar por la educación para los próximos años, incluso estableciendo un enfoque obligatorio bajo una mirada laica. Sin embargo, las iniciativas aisladas con muchos objetivos específicos, y no plurales como sucede en Chile, hacen que este tipo de enseñanza siga desmembrada si hablamos de una educación sexual transversal. Sin embargo, el mencionado caso del estudiante Sergio Urrego mostró a las instituciones educativas y administrativas que el enfoque dado hasta ahora en la sexualidad debe ampliarse, y surgieron iniciativas incluso con una educación aplicada en los derechos humanos, sexuales y reproductivos, con un enfoque de género. Perspectivas como esta siguen siendo relativamente nuevas, pero Colombia está en el camino hacia mejores resultados en el número no sólo del índice de embarazo adolescente, sino de una mejor relación de convivencia basada en la igualdad de género, de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Sin embargo, es necesario que la obra sea vista bajo una mirada estratégica, tanto en la salud pública como en la garantía de los derechos fundamentales. La alineación de la educación sexual con otras acciones planificadas y llevadas a cabo en los campos de la educación, la salud, el desarrollo social y económico y, en consecuencia, los derechos humanos, podría llevar al país a alcanzar los objetivos establecidos.

Las altas tasas de embarazo adolescente han hecho que Ecuador implemente en las leyes nacionales los intentos de reducir estas cifras y salir del tope de la clasificación en América Latina. Sin embargo, el enfoque del tema no se hace sistemáticamente, agrupando demasiados sectores del Estado y las iniciativas se centran, en la mayoría de los casos, en reducir el número de adolescentes

embarazadas. Una educación sexual integral, incluso sugerida por los organismos internacionales de derechos humanos, puede llevar al país a avanzar en más temas sociales y económicos. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador sienta un precedente histórico para todo el hemisferio, pero especialmente para el propio país, que ve un importante caso de violación cometida por un agente del Estado, con el factor agravante de ser seguido por un suicidio, expuesto y juzgado internacionalmente. Si Ecuador busca no repetir el delito condenado es necesario validar cómo siguen las recomendaciones cada vez más constantes en las convenciones internacionales.

Conclusión

Al implementar leyes y programas de educación sexual a nivel nacional, es necesario, como lo hace Chile, estar atento a los conceptos de transversalidad y hacer actualizaciones constantes, para que los resultados deseados muestren un avance y contribuyan a las percepciones de ciudadanía, derechos humanos, desarrollo, ya sean personales y económicos, como lo propugnan las convenciones internacionales y los autores investigados en este estudio. Estas características, todavía ausentes en las realidades colombiana y ecuatoriana, determinan si los efectos tendrán repercusiones positivas por medio de una mirada de planificación estratégica, sea en conceptos sociales o económicos.

La educación sexual aún no es lo suficientemente desarrollada en el marco de un sistema de políticas públicas de educación y salud. Por eso, más estudios se hacen necesarios para que este tema sea visto no con una mirada ideológica o de adoctrinamiento, sino como una estrategia de desarrollo. Una investigación segmentada, sea por países, departamentos o ciudades, enfocada en los costos de aplicar un programa de educación sexual integral, contrastada con los beneficios que la actividad proporciona, sea en índices económicos, de desarrollo, sociales y educacionales, a

mediano o largo plazo, pueden traer ventajas de aplicabilidad aún más concretas. Además, las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de derechos humanos también pueden ser empleadas en ámbitos menores e inspirar políticas públicas de diversas entidades territoriales o, incluso, de escuelas específicas.

Por ahora, ningún país de América Latina realiza un método de enseñanza en sexualidad tal como sugieren los mecanismos de derechos humanos. Así como Chile, hay propuestas en Uruguay y Argentina que se aproximan a las recomendaciones, pero que no las abarcan en su totalidad. Por lo tanto, una investigación que coloque en práctica estos métodos se hace válida, toda vez que sería una oportunidad de realizar una investigación prescriptiva sobre el asunto. Se sugiere un estudio donde se aplique este abordaje en un número determinado de escuelas y se compare los resultados con demás instituciones educativas con las mismas características pero que no recibieron la enseñanza para sexualidad por medio de este modelo. De esta forma, con datos precisos, será posible analizar como este procedimiento se presenta frente a la realidad de Latinoamérica y, así, proponer informaciones que puedan ser presentadas a los organismos de derechos humanos y proporcionar oportunidades de crear políticas públicas en la educación y la salud. Al brindar datos científicos, y acercar esta práctica con los responsables por los niños, niñas y adolescentes, también se puede disminuir el prejuicio que este tema sufre por parte de algunas realidades, tanto por falta de conocimiento o por doctrinas negacionistas.

Esta investigación tomó como referencia la tasa de adolescentes embarazadas en los países mencionados, pero también se podrían clasificar otros temas relacionados con la falta de educación sexual integral, como el suicidio, el feminicidio, los asesinatos contra la población LGBTIQ+, la violencia motivada por prejuicios, abuso sexual, violación de niños, niñas y adolescentes, entre otros, todos problemas sociales presentes en la realidad de América Latina. Frecuentemente los países de la región aparecen en clasificaciones mundiales que categorizan estos temas. Por ejemplo,

entre las 25 naciones con más casos de feminicidio y acoso escolar en el mundo, 14 y 10, respectivamente, están en Latinoamérica. Brasil es el campeón mundial, hace 13 años, en asesinatos de personas transexuales. Así como los casos de abuso sexual, donde 2 países latinos están entre los 10 con más casos en el mundo. Números que podrían ser disminuidos de manera preventiva por medio de la educación, tomando como base los casos investigados. En este contexto, la efectividad de enseñar sexualidad en las escuelas desempeña un papel clave, al igual que las familias, en la identificación y asistencia a los jóvenes vulnerables o perjudicados por la falta de información, teniendo en cuenta que el acceso a la información es también un derecho humano.

Referencias

- Almeida, K. D.; Luz, N. S. (2014). *Educação Sexual, uma discussão para a escola?* Curitiba, Appris.
- Alves, A. L. (2001). *Relações Internacionais e Temas Sociais – A Década das Conferências*. Brasília, IBRI.
- Astudillo, M. (2017). La Educación Sexual en Latinoamérica: un campo de fuerzas en tensión. *Revista Cultura del Ciudadano*, 14 (1), pp. 57-70. doi: 10.18041/1794-5232/cultrua.2017v14n1.4329
- Barbosa, L., Viçosa, C. y Folmer, V. (2019). A Educação Sexual Nos Documentos Das Políticas De Educação e Suas Resignificações. *Revista Eletrônica Acervo*, 11 (10). doi: 10.25248/reas.e772.2019
- Bedoya Abella, C. (2014). Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. *Sophia*, 10 (1), pp. 95-106.

- Bermúdez, L. y Matías, S. (2019). *Sexualidad Sin Pelos en la Lengua*. Bogotá, Intermedio Editores.
- Bruñol, M. (2001). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En M. Oviedo y E. Ulate (Eds.). *Derechos de la niñez y la adolescencia* (pp. 31-45). San José, Costa Rica. Conamaj.
- Casullo, M. M. (2004). Ideaciones y comportamientos suicidas en adolescentes: una urgencia social. *Facultad de Psicología - UBA / Secretaría de Investigaciones / XII Anuario de Investigaciones*, pp. 173-182.
- Chade, J. (2020). Em manobra, Brasil lavará as mãos em ação de ultraconservadores na ONU. Recuperado de <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/07/16/em-manobra-brasil-lava-as-maos-em-acao-de-ultraconservadores-na-onu.htm> (Acceso en 2020, Noviembre 14).
- Chile. (2008). Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo. Recuperado de: <https://www.siteal.iiiep.unesco.org/bdnp/2437/manual-atencion-personalizada-proceso-reproductivo> (Acceso en 2020, Agosto 14).
- Chile. (2010). Historia de la Ley N° 20.418. Recuperado de <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Historia%20de%20la%20Ley%2020418.pdf> (Acceso en 2020, Agosto 14).
- Chile. (2017). Orientaciones Técnicas para Concurso de Proyectos. Programa de Protección Especializada en Reinserción Educativa. Recuperado de https://www.siteal.iiiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6451.pdf (Acceso en 2020, Agosto 14).

- Chile. (2018a). Educación Sexual. Estrategia en Sexualidad, Afectividad y Género. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6457.pdf (Acceso en 2020, Agosto 15).
- Chile. (2018b). Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018 – 2030. Recuperado de: https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ch_8001.pdf (Acceso en 2020, Agosto 12).
- Chile. (2018c). Educación para la Igualdad de Género. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_chile_0652.pdf (Acceso en 2020, Agosto 10).
- Chile. (2018d). Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2015-2025. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_chile_0654.pdf (Acceso en 2020, Agosto 14).
- Chile. (2018e). Bases Curriculares Educación Parvularia. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6461.pdf (Acceso en 2020, Agosto 08).
- Chile. (2018f). Lineamientos técnicos. Marco pedagógico para la mejora de la calidad de las prácticas educativas. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6466.pdf (Acceso en 2020, Agosto 14).

- Chile. (2018g). Modelo de Gestión Intersectorial. Aulas del Bien Estar. Documento de Orientaciones Técnicas. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6424.pdf (Acceso en 2020, Agosto 18).
- Chile. (2018h). Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_chile_0636.pdf (Acceso en 2020, Agosto 14).
- Chile. (2018i). Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018 – 2030. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ch_8001.pdf (Acceso en 2020, Agosto 10).
- CIDH. (1999). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. Convención Americana de Derechos Humanos. Recuperado de <https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm> (Acceso en 2020, Octubre 14).
- CIDH. (2020). Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2020. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica, San José, CIDH.
- Colombia. (2014). Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/3302.pdf (Acceso en 2020, Octubre 14).

Colombia. (2015). Código de la Infancia y Adolescencia. Ley n° 1.098/2006. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_392.pdf (Acceso en 2020, Octubre 12).

Colombia. (2018a). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_8000.pdf (Acceso en 2020, Octubre 14).

Colombia. (2018b). Ley General de Educación. Ley n° 115. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_colombia_0393.pdf (Acceso en 2020, Octubre 05).

Colombia. (2018c). Documento Conpes Social N° 147/2012. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_0413.pdf (Acceso en 2020, Octubre 11).

Colombia. (2018d). Ley N° 1620/2013. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_0386.pdf (Acceso en 2020, Octubre 14).

Colombia. (2018e). Manual Operativo. Modalidad Institucional para la Atención a la Primera Infancia. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/co_3307_-manual_operativo_modalidad_institucional.pdf (Acceso en 2020, Octubre 17).

DW. (2020). ONU: "El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina".

Recuperado de <https://www.dw.com/es/onu-el-embarazo-adolescente-es-una-f%C3%A1brica-de-pobres-en-am%C3%A9rica-latina/a-55569024> (Acceso en 2020, Noviembre 11).

Ecuador (2017). Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021. Recuperado de <https://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PLAN%20NACIONAL%20DE%20SS%20Y%20SR%202017-2021.pdf> (Acceso en 2020, Septiembre 14).

Ecuador. (2018a). Código de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 2002-100). Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11020.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 22).

Ecuador. (2018b). Plan Decenal de Educación de Ecuador 2006-2015. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ec_9029.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 01).

Ecuador. (2018c). Programa de Gobierno 2017-2021. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0243.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 07).

Ecuador. (2018d). Toda una Vida - Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0244.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 25).

Ecuador. (2018e). Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_6005.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 04).

Ecuador. (2018f). Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017.

Recuperado de

[https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0245.](https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0245.pdf)

pdf (Acceso en 2020, Septiembre 17).

Ecuador. (2018g). Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de

[https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_6002.](https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_6002.pdf)

pdf (Acceso en 2020, Septiembre 02).

Ecuador. (2018h). Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. Recuperado de

https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ec_0234.pdf (Acceso

en 2020, Septiembre 14).

Ecuador. (2018i). Propuesta de la Comunidad Educativa para el Plan Nacional de Educación 2016-

2025. Recuperado de

[https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0240.](https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0240.pdf)

pdf (Acceso en 2020, Septiembre 03).

Ecuador. (2018j). Ley N° 67/2006. Ley Orgánica de Salud. Recuperado de

[https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0225.](https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0225.pdf)

pdf (Acceso en 2020, Septiembre 12).

Ecuador. (2018k). Registro Oficial N° 180/2014. Código Orgánico Integral Penal (Delitos contra

menores: explotación sexual, pornografía infantil y comercialización, turismo sexual, reclutamiento de niños por grupos armados, trabajo infantil, trata de personas). Recuperado

de

https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0217.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 19).

Ecuador. (2018l). Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Decreto Ejecutivo n. 1.241. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ec_9026.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 14).

Ecuador. (2018m). Ley n° 175. Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6131_0.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 29).

Ecuador. (2018n). Pacto del Gobierno Nacional con niños, niñas y adolescentes contra la violencia. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ec_6130.pdf (Acceso en 2020, Septiembre 18).

Figueiró, M. (2007). Educação Sexual: Como ensinar no espaço da escola. *Revista Linhas*, 7 (1).

Flórez, M. (2018). La violencia contra las mujeres en la legislación penal colombiana. *Nuevo Foro Penal*, 90, pp. 11-53. doi: 10.17230/nfp.14.90.1

Frischeisen, L. C. (2018). Educação de gênero na escola previne feminicídios, dizem especialistas. Entrevista concedida a Andreia Verdélio. Recuperado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-09/educacao-de-genero-na-escola-previne-feminicidios-dizem-especialistas> (Acceso en 2020, Octubre 27).

- Guarnieri, T. (2010). Os Direitos das mulheres no Contexto Internacional – da criação da ONU (1945) à Conferência de Beijing (1995). *Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery*, 8.
- Hunt, L. (2007). *Inventing Human Rights: A History*. Nova Iorque: W. W. Norton.
- Ide, E. (2017). Propuestas feministas en los procesos constituyentes latinoamericanos de las últimas décadas. En M. Rodríguez (Ed.). *Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina* (pp. 43-60). Buenos Aires, Argentina. Clacso.
- Leal, R. y Gorczewski, C. (2013). Artigo 13º. En W. Balera y V. Silveira (Eds.). *Comentários ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais*. Curitiba, Brasil. Clássica.
- Londoño E., M. (1996). *Derechos Sexuales y Reproductivos. Los más humanos de todos los derechos*. Cali. Talleres Gráficos de Impresora Feriva S.A. Cali.
- Maddaleno, M., Morello, P. y Infante-Espinola, F. (2003). Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y el Caribe: desafíos para la próxima década. *Salud Pública de México*, Cuernavaca, 45 (1), pp. 132-139.
- Miller, A., Roseman, M. (2011). Sexual and reproductive rights at the United Nations: frustration or fulfilment? *Reproductive Health Matters*, 19, pp. 102-118.
- Montero V., A. (2011). Educación sexual: un pilar fundamental en la sexualidad de la adolescencia. *Revista Médica de Chile*, Santiago, 139 (10), pp. 1249-1252.
- OEA. (1995). *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)*. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de <http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf>

- ONU. (1948). *Países-membros da ONU*. Organização das Nações Unidas. Recuperado de <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>
- ONU. (1995). *Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo*. Organização das Nações Unidas. Recuperado de https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf (Acceso en 2020, Octubre 30).
- ONU. (1996). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Organização das Nações Unidas. Recuperado de <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf> (Acceso en 2020, Octubre 31).
- ONU. (2009). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Organização das Nações Unidas. Recuperado de: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf> (Acceso en 2020, Octubre 27).
- ONU. (2014). Estrategia del PNUD para la Juventud 2014-2017. Organização das Nações Unidas. Recuperado de <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UNDP-Youth-Strategy-2014-2017-SP.pdf> (Acceso en 2020, Octubre 28).
- ONU. (2018). International technical guidance on sexuality education. An evidence-informed approach. Recuperado de https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf (Acceso en 2020, Octubre 26).

- ONU. (2019). Informe del Consejo de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de <https://undocs.org/es/A/74/53> (Acceso en 2020, Octubre 26).
- Pérez, J., Ruiz, F. y Rodríguez, B. (2020). Guardia Civil. Temario. Escala de Cabos y Guardias (1). Sevilla, España. Rodio.
- Pérez Prada, M. P., Martínez Baquero, L. C., Vianchá Pinzón, M. A. y Avendaño Prieto, B. L. (2017). Intento e ideación suicida y su asociación con el abuso sexual en adolescentes escolarizados de Boyacá – Colombia. *Diversitas*, 13(1), pp. 91-101.
- PNUD. (2019). Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf (Acceso en 2020, Octubre 26).
- Redim. (2016). La desigualdad de género comienza en la infancia Manual teórico-metodológico para transversalizar la perspectiva de género en la programación con enfoque sobre derechos de la infancia. Recuperado de https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5850_d_Manual_Desigualdad.pdf (Acceso en 2020, Noviembre 14).
- Roa, C. A. P. (2017). Factores asociados con riesgo de suicidio de adolescentes y jóvenes autoidentificados como lesbianas, gays y bisexuales: estado actual de la literatura. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 48(1), pp. 02-09.
- Salud con Lupa. (2019). Las mentiras sobre la educación sexual en América Latina. Recuperado de <https://saludconlupa.com/comprueba/las-mentiras-sobre-la-educacion-sexual-en-america-latina> (Acceso en 2020, Noviembre 04).
- Santos, M. C. G. (2020). Educação sexual nas escolas e a prevenção em caso de abuso. Recuperado de <https://www.leiaja.com/carreiras/2020/08/31/educacao-sexual-nas-escolas-e->

prevencao-em-caso-de-abuso (Acceso en 2020, Noviembre 07).

Sawyer, D. (2019). Palco e bastidores da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. *Revista Brasileira De Estudos De População*, 36, pp. 1-8.

Spaccarotella, S. (2019). La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”: La aplicación real y efectiva en el ámbito judicial argentino. *Lex – Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 16 (21), pp. 53-78.

Scioscioli, S. (2014). El Derecho a la Educación Como Derecho Fundamental y Sus Alcances en el Derecho Internacional de Los Derechos Humanos. *Journal of Supranational Policies of Education*, (2), pp. 06-24.

Talavera, F. (1998). La Declaración Universal de Derechos Humanos cincuenta años después. *Agenda Internacional*, 4 (10), pp. 75-86.

Tobar, F. (2020). ONU: "El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina". Recuperado de <https://www.dw.com/es/onu-el-embarazo-adolescente-es-una-f%C3%A1brica-de-pobres-en-am%C3%A9rica-latina/a-55569024> (Acceso en 2020, Noviembre 11).

Turgis, S. (2012). Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne. Paris, Publications de l’Institut International des Droits de l’Homme.

UN. (2020). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations. Recuperado de <https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/cescr.aspx> (Acceso en 2020, Noviembre 11).

Unesco. (2010). Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad.

Recuperado de https://educacionsexual.mineduc.cl/docs/2010_%20UNESCO_OrientacionesEdSexualUnesco.pdf (Acceso en 2020, Noviembre 01).

UNFPA. (2018). El Poder de Decidir. Derechos Reproductivos y Transición Demográfica. Recuperado de https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2018_ES_SWP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf (Acceso en 2020, Noviembre 01).

UNFPA. (2020, Noviembre 11). El impacto socioeconómico del embarazo en la adolescencia representa 1,242 millones de dólares o 0.35% del PIB anual para seis países de América Latina. Oficina de América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Recuperado de <https://lac.unfpa.org/es/news/el-impacto-socioecon%C3%B3mico-del-embarazo-en-la-adolescencia-representa-1242-millones-de-d%C3%B3lares-o>. (Acceso en 2020, Noviembre 07).

UNICEF. (1990). Convenção sobre os Direitos da Criança. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Recuperado de <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca> (Acceso en 2020, Octubre 11).